

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 216/2004.
QUEJOSA: ***.**

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.

Í N D I C E:	
	Págs.
SÍNTESIS	I
RESULTANDOS	
AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS	1
SÍNTESIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN	3
PUNTO RESOLUTIVO	4
TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN	5
CONSIDERANDOS	
COMPETENCIA DE LA SALA	6
OPORTUNIDAD DEL RECURSO	6
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA	7
AGRAVIOS	8
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO	10
PUNTOS RESOLUTIVOS	22

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 216/2004.
QUEJOSA: ***.**

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.

S Í N T E S I S:

- **MATERIA DEL ASUNTO:** Recurso interpuesto contra una sentencia de amparo directo por haber declarado inoperantes los conceptos de violación referentes a la inconstitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

- **TRIBUNAL COLEGIADO:** Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

- **ACTO REVISADO:** Sentencia dictada en el amparo 186/2003, de fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro.

- **SENTIDO DEL FALLO RECURRIDO:** Se niega el amparo. Por lo que hace al tema de constitucionalidad de ley, se declaran inoperantes los conceptos de violación.

- **RECORRENTE:** La parte quejosa.

- **El proyecto propone:**

En las consideraciones:

Los agravios que se refieren a cuestiones de legalidad de la sentencia de amparo son inoperantes.

Los agravios que insisten en la inconstitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son igualmente inoperantes porque no combaten las consideraciones del fallo recurrido, que declaró inoperantes los conceptos de violación.

Son infundados los agravios consistentes en que no se atacó el decreto que otorgó facultades extraordinarias para legislar al Ejecutivo Federal, y el que se refiere a que sí se aplicaron al caso las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues de la lectura del fallo recurrido se

advierte que fue correcto el pronunciamiento hecho en este sentido por el Tribunal Colegiado.

- En los puntos resolutivos:

PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** , en contra de los actos y por las autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

- Tesis de jurisprudencia que se invocan:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. (página 11).

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA. (página 12).

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA. (página 16).

AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.(página 17).

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. (página 18).

Tesis aisladas que se invocan:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTAN INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES O DE INEXACTA APLICACIÓN DE UNA LEY SECUNDARIA. (página 13).

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 216/2004.
QUEJOSA: *****.**

**PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día **veintiocho de abril de dos mil cuatro.**

**VISTOS; Y,
RESULTANDO:**

PRIMERO.- Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil tres ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, *********, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las **autoridades y por los actos** siguientes:

***"AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.- Magistrado de la
"Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el
"Estado de Nuevo León, con domicilio oficial conocido en
"esta ciudad. 2.- Juez Noveno de lo Civil del Primer
"Distrito Judicial en el Estado, con domicilio oficial
"conocido en esta ciudad. La primera de dichas
"autoridades tiene el carácter de ordenadora y la segunda
"es ejecutora. — ACTOS RECLAMADOS: Del magistrado***

*"responsable reclamo la sentencia de segunda instancia
"de fecha 28 de marzo del 2003, dictada en el toca de
"apelación en definitiva número 473/98, relativo a la
"apelación interpuesta por la parte demandada, ahora
"quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada
"dentro del juicio ejecutivo mercantil número 2465/96,
"promovido ante el Juzgado Noveno de lo Civil del Primer
"Distrito Judicial en el Estado por *****", en contra de la
compareciente, "ahora quejosa, en cuya resolución
judicial declaró "inatendibles los tres primeros motivos de
inconformidad "e insuficientes los dos últimos agravios
formulados en "contra de la resolución judicial apelada y,
en "consecuencia, confirmó la sentencia definitiva de
fecha "11 de julio de 1997, pronunciada por el Juez
Novenos de "lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado dentro de "los autos del juicio ejecutivo mercantil
número 2465/1996 "y, además, condenó a la demandada
(aquí quejosa) al "pago de los gastos y costas del juicio
en ambas "instancias. — Del Juez Novenos de lo Civil
responsable "reclamo la ejecución de la mencionada
sentencia de "segunda instancia. — De ambas
autoridades se "reclaman igualmente todos los demás
efectos y "consecuencias jurídicas y materiales, directas
e "indirectas que se deriven de los actos reclamados".
(fojas 4 y 5 del cuaderno de amparo).*

SEGUNDO: La quejosa señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14 y 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestó los antecedentes del caso y expresó como conceptos de violación los que, en lo que interesa al presente asunto, a continuación se sintetizan:

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es inconstitucional porque fue expedida por el Ejecutivo Federal, contraviniendo los artículos 29 y 49 de la Constitución, debido a lo cual está afectada de nulidad y, por consecuencia, son nulos también el contrato y el pagaré exhibidos como base de la acción.

La inconstitucionalidad de la referida Ley se deriva del hecho de que fue expedida en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo Federal por el Congreso de la Unión, asumiendo la facultad legislativa, que solo puede reunirse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 29 constitucional, lo cual no sucedió al expedirse el citado ordenamiento legal.

Debido a lo anterior, son también inconstitucionales las reformas que a través del tiempo se le han hecho, ya que lo que es absolutamente nulo no puede ser confirmado; por ello, el contrato de apertura de crédito y el pagaré referidos están afectados de nulidad absoluta y carecen de eficacia jurídica por haberse

celebrado y suscrito de acuerdo con esa Ley inconstitucional.

TERCERO.- Correspondió conocer de la aludida demanda al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el cual, el diecinueve de mayo de dos mil tres, admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 186/2003.

Previos los trámites legales, el veintitrés de enero de dos mil cuatro, dicho Tribunal dictó sentencia, concluyendo con el punto resolutivo siguiente:

"ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni "protege a **, respecto de los "actos que reclama del Magistrado de la Primera "Sala del Tribunal Superior de Justicia en el "Estado, así como de su ejecución imputados al "Juez Noveno de lo Civil del Primer Distrito Judicial "en la entidad". (foja 104 vuelta del cuaderno de amparo).***

CUARTO.- Inconforme con la referida sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil cuatro, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

Por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil cuatro, dicho órgano colegiado ordenó se remitieran los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar que en

la sentencia recurrida no se decidió sobre la constitucionalidad de una ley ni tampoco se estableció la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal.

QUINTO.- Recibidos los autos en este Alto Tribunal, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de diecinueve de febrero de dos mil cuatro, admitió el recurso interpuesto y requirió al Procurador General de la República para que formulara el pedimento respectivo, si lo estimaba conveniente.

El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no formuló pedimento alguno.

Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil cuatro, el Presidente de este Máximo Tribunal ordenó remitir a esta Primera Sala el presente asunto, por corresponder la materia del mismo a su especialidad.

SEXTO.- El dieciséis de marzo de dos mil cuatro, la Presidenta de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento de la Sala al conocimiento del presente asunto y designó como ponente al Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y en relación con los puntos Segundo, Cuarto y Tercero Transitorios del Acuerdo General número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo, en el que se hizo valer la inconstitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SEGUNDO.- Por su parte, el recurso fue interpuesto en tiempo, pues la sentencia recurrida fue notificada al quejoso por lista el veintisiete de enero de dos mil cuatro, de modo que la notificación surtió efectos el veintiocho de enero de dos mil cuatro y los diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrieron del veintinueve de enero al doce de febrero de dos mil cuatro, y el escrito respectivo se presentó el diez de febrero de dos mil cuatro. Del cómputo anterior, se descuentan los días treinta y uno de enero, así como el primero, cinco, siete y ocho de febrero, todos de dos mil cuatro, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 23, de la Ley de

Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO.- Al emitir la sentencia ahora recurrida, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, hizo las consideraciones que, en lo que interesan para el presente recurso, a continuación se sintetizan:

Los argumentos de la quejosa son inoperantes, en primer lugar, porque en la resolución que constituye el acto reclamado no se aplicó la Ley que tilda de inconstitucional y no se advierte que el acto reclamado se haya fundado en los preceptos legales del 170 al 174 y del 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo cual no existe afectación que haya trascendido al sentido del fallo emitido por la autoridad responsable, en relación con la supuesta aplicación del ordenamiento en cita.

Además, la inoperancia del concepto de violación de referencia es patente, pues tiende a controvertir vicios formales del decreto por el cual el Congreso de la Unión delegó facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar en diversas materias, toda vez que sobre este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la inoperancia de los agravios encaminados a controvertir la falta de fundamentación y motivación del decreto por el cual el Congreso de la

Unión otorgó esas facultades, en atención a que las mismas no implican la reunión de dos poderes en uno, ni que se delegue el poder legislativo en ejecutivo, sino que son únicamente un auxilio de un poder a otro.

CUARTO.- En sus agravios, *****, expresó, en síntesis, lo siguiente:

1.- La sentencia recurrida viola los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque el Tribunal Colegiado no realizó una correcta apreciación de las pruebas aportadas al juicio.

2.- Las tesis invocadas por el tribunal resolutor no son tesis de jurisprudencia, pues se trata de criterios aislados que no son obligatorios y, por tanto, resulta ilegal que se hayan aplicado al presente caso.

3.- Contrariamente a lo que afirmó el Tribunal Colegiado, sí se aplicaron, aunque de manera implícita, los artículos 170 al 174 y del 291 al 301, todos ellos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la sentencia que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías, ya que tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia se tuvieron como plenamente válidos y eficaces, el contrato de apertura de crédito y el pagaré que sirvieron como base de la acción y, con base en ello, se condenó a la quejosa. En

tal virtud, al ser el citado contrato y el pagaré figuras jurídicas reguladas únicamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta obvio que las autoridades responsables, implícitamente, aplicaron al caso estos artículos, por lo cual sí existió una afectación que trascendió al sentido del fallo emitido por la autoridad responsable.

4.- Es falso que con los conceptos de violación se ataquen los vicios formales del decreto por el cual el Congreso de la Unión delegó facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar en diversas materias, pues en momento alguno se combatió dicho decreto, ni sus vicios formales, sino que se afirmó categóricamente que los artículos 170 al 174 y 291 al 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como la totalidad de ese ordenamiento, son inconstitucionales en virtud de que fueron expedidas por el Ejecutivo Federal, en contravención de los artículos 29 y 49 constitucionales, por lo que se debió entrar al estudio del concepto de violación relativo.

5.- Contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Colegiado, cuando el Congreso de la Unión otorga legalmente facultades extraordinarias para legislar al Presidente de la República, sí se reúnen dos poderes

en uno y sí se delega el Poder Legislativo en el Ejecutivo.

6.- Además, toda ley para ser constitucional, legalmente válida y de observancia obligatoria, debe necesariamente cumplir con el proceso formativo establecido en la Constitución Federal y, por lo mismo, es indispensable que para crear las leyes existan en el Congreso de la Unión la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y la publicación, que marque el inicio de su vigencia, por lo cual resulta incuestionable que si al emitirse la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no se cumplieron esos requisitos, dicha ley es inconstitucional y, como consecuencia, ni los jueces ni los ciudadanos deben ser regidos por la misma.

QUINTO.- Los agravios hechos valer por el recurrente son inoperantes por un lado e infundados por otro, de acuerdo a las consideraciones que se exponen a continuación.

Por una parte, los agravios relativos a la supuesta violación de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por no haber apreciado el Tribunal Colegiado correctamente las pruebas aportadas al juicio, así como el agravio consistente en que las tesis invocadas por el tribunal no son jurisprudencias, sino tesis aisladas, son inoperantes.

Esto es así, debido a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, fracción V, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el recurso de revisión contra las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de amparo directo, se limita exclusivamente a la decisión de las cuestiones constitucionales, sin poder comprender otras, como son las planteadas por la inconforme.

Los motivos de agravio que se analizan son inoperantes por estar orientados a combatir aspectos de carácter meramente legal, que son ajenos a la litis del recurso de revisión, la cual se constriñe, como ya se ha dicho, al examen de las cuestiones propiamente constitucionales.

El criterio expresado es coincidente con el sostenido por este Alto Tribunal en las tesis de **jurisprudencia y aisladas** que a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: VIII, agosto de 1998

"Tesis: 2ª/J. 53/98

"Página: 326.

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS

"AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.

"Conforme a los artículos 107, fracción IX,

"constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo,

"que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: P./J. 46/95

"Página: 174.

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE.

"SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A

"LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.

"De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante."

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: V, Primera Parte, enero a junio de 1990

"Tesis: P. III/90

"Página: 49.

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTAN

"INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE

"VIOLACIONES PROCEDIMENTALES O DE

"INEXACTA APLICACIÓN DE UNA LEY

"SECUNDARIA. Los agravios que plantean

"violaciones procedimentales o de inexacta aplicación

"de una ley secundaria resultan inoperantes en la

"revisión de sentencias pronunciadas en amparo

"directo por Tribunales Colegiados de Circuito, pues

"tales cuestiones no pueden ser materia de la revisión,

"toda vez que la Suprema Corte debe limitarse a

"resolver sobre la constitucionalidad de la ley, conforme

"con lo dispuesto por los artículos 83, fracción V,

"párrafo segundo, y 93 de la Ley de Amparo, en el

"sentido de que en la revisión en amparo directo la

"materia se limita, exclusivamente, a la decisión de

"cuestiones propiamente constitucionales, sin poder

"comprender otras".

"Amparo directo en revisión 3109/88. Rosa Hernández García. 17 de

"enero de 1990. Unanimidad de veinte votos de los señores

"ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela

"Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón

"Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado,

*"Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano,
"Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y
"Schmill Ordóñez, Presidente del Río Rodríguez. Ausente: Castañón
"León. Ponente: Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac
"Gregor Poisot."*

Por otra parte, también son inoperantes los motivos de inconformidad consistentes en que cuando el Congreso de la Unión le otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar, sí se reúnen dos poderes en uno, y se delega el Poder Legislativo en el Ejecutivo, y en que toda ley para poder ser constitucional y, por tanto, para que pueda ser de observancia obligatoria, debe cumplir con el proceso legislativo expresado en la Constitución, es decir, con la iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación para tener la posibilidad de iniciar su vigencia, lo cual no acontece en el presente caso, por lo que ni los ciudadanos ni los jueces deben ser regidos por la misma.

La inoperancia de los anteriores argumentos resulta del hecho de que las manifestaciones de la recurrente, no atacan las consideraciones que el Tribunal Colegiado tomó en cuenta para considerar inoperantes los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En efecto el Tribunal Colegiado Consideró que los conceptos de violación eran inoperantes, pues, por un lado, en la resolución que constituye el acto reclamado no se aplicó la ley que la quejosa tildó de inconstitucional, ni se apoyó en los preceptos legales impugnados; por otro lado, el referido tribunal

consideró que la inoperancia de los conceptos de violación, también se derivaba del hecho de que éste tendía a controvertir vicios formales del decreto por el cual el Congreso de la Unión delegó facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la inoperancia de los agravios tendentes a controvertir la falta de fundamentación y motivación del decreto por el cual el Congreso de la Unión otorgó esas facultades.

El agravio que se analiza, lejos de combatir los citados razonamientos del Tribunal Colegiado, se limita a insistir en los motivos por lo que se considera que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es inconstitucional, pero nada dice respecto de la declaración de inoperancia de los conceptos de violación; de esta manera, el referido motivo de inconformidad es inoperante ya que los agravios en la revisión deben formularse en relación directa e inmediata con las consideraciones expresadas en la sentencia que se recurre y no en concomitancia con los conceptos de impugnación expresados en la demanda de garantías.

Así, al no haber combatido la declaración de inoperancia de los conceptos de violación y no estar el caso comprendido en ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja, el motivo de inconformidad que se analiza resulta igualmente inoperante, ya que los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre.

Sirve de apoyo a lo anterior, la **jurisprudencia** que a continuación se cita:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 145-150 Primera Parte

"Página: 159.

**"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN
"RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y
"CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA. Los**
*"agravios deben estar en relación directa e inmediata
"con los fundamentos contenidos en la sentencia que
"se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la
"cita de las disposiciones legales que se estimen
"infringidas y su concepto, sino también la
"concordancia entre aquellas, éste y las
"consideraciones que fundamenten esa propia
"sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la
"introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que
"no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita
"al estudio integral del fallo que se combate, con vista
"de los motivos de inconformidad que plantean los
"recurrentes".*

Son igualmente aplicables las siguientes tesis de **jurisprudencia:**

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989

"Tesis: 3ª/J. 30 13/89

"Página: 277.

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS

"QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE

"LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA

"NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA

"DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la

"sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas

"consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el

"amparo solicitado respecto de los actos reclamados

"de las distintas autoridades señaladas como

"responsables en la demanda de garantías, y en el

"recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de

"esas consideraciones el recurrente se concreta a

"esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar

"directamente los argumentos expuestos por el

"juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan

"inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de

"los supuestos de suplencia de la deficiencia de los

"mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de

"Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa

"deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida".

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

**"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta**

"Tomo: XVII, febrero de 2003

"Tesis: 1ª/J. 6/2003

"Página: 43.

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON

"AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE

"VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS

"CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA

"RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para

"efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace

"sino reproducir, casi en términos literales, los

"conceptos de violación expuestos en su demanda, que

"ya fueron examinados y declarados sin fundamento

"por el Juez de Distrito, si no expone argumentación

"alguna para impugnar las consideraciones de la

"sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se

"reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal

"señala para la expresión de agravios, debiendo, en

"consecuencia, confirmarse en todas sus partes la

"resolución que se hubiese recurrido."

En cuanto al agravio que se hace consistir en que, con sus conceptos de violación no se combatieron los vicios formales del decreto por el cual el Congreso de la Unión delegó facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar en diversas materias, como incorrectamente lo establece el Tribunal Colegiado, sino que categóricamente se afirmó la

inconstitucionalidad de los artículos 170 a 174 y 291 a 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que fue expedida por el Poder Ejecutivo en violación de los artículos 29 y 49 constitucionales, el mismo es infundado.

Lo anterior es así, porque de la lectura de los conceptos de violación, se desprende que la propia quejosa hace derivar la inconstitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el hecho de que la misma no se creo conforme al proceso legislativo y, además, porque en el momento en que se concedieron facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar en materia mercantil, no se daban las condiciones establecidas por los artículos 29 y 49 de la Constitución General de la República, para unir en uno solo, dos poderes de la Unión.

De lo anterior se desprende que la recurrente sí ataca la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo por parte del Congreso de la Unión y parte de este supuesto vicio de origen para impugnar la constitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cual es suficiente para deducir el ataque implícito realizado contra tal decreto, alegando vicios formales del mismo.

En virtud de lo anterior, el argumento de la quejosa resulta infundado porque es evidente que, a través de los conceptos de violación, sí ataca los vicios formales del mencionado decreto pues cuestiona la delegación de facultades que hizo el Congreso

de la Unión al Ejecutivo para legislar en materia mercantil, como correctamente lo consideró el tribunal de amparo.

Por lo que respecta al argumento consistente en que sí se aplicó la Ley tildada de inconstitucional en el acto reclamado, porque la aceptación por los juzgadores de primera y de segunda instancia de la validez y eficacia del contrato de apertura de crédito y el pagaré que fueron exhibidos como documentos base de la acción, conlleva la aplicación tácita de los preceptos que rigen a dichas figuras jurídicas y, por ello, sí se le aplicó la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en especial los artículos 170 al 174 y del 291 al 301 contenidos en la misma, debe decirse que este motivo de inconformidad es infundado.

Esto es así, pues del análisis de las constancias de autos, en especial de la demanda de garantías y de la transcripción hecha por el Tribunal Colegiado de la sentencia de segunda instancia, se desprende que no se aplicó en dicho fallo disposición alguna de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como correctamente lo consideró el órgano colegiado de amparo.

En efecto, aun cuando en el juicio natural se hizo valer la nulidad del contrato de apertura de crédito y del pagaré exhibidos como documentos base de la acción, dicha nulidad se hizo derivar de disposiciones distintas de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, la nulidad no se basó en vicios propios de dichos documentos o en que no cumplieran con los

requisitos señalados en la precitada ley para su validez, sino que se fundó en causas señaladas en la Ley de Instituciones de Crédito, en la ahora derogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito y en el reglamento de ésta, tales como la viabilidad del crédito y de que este último se otorgó para el pago de pasivos del acreditado.

Por ello, no le asiste razón a la recurrente al sostener que se le aplicaron implícitamente las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues la declaración de validez de los documentos que menciona se hizo en base a los ordenamientos señalados en el párrafo precedente.

Se corrobora lo anterior con la afirmación de la recurrente contenida en su demanda de garantías, en el apartado relativo a las “leyes que se dejaron de aplicar o que se aplicaron inexactamente” (foja 5 del cuaderno de amparo), pues al manifestar los ordenamiento que consideró mal aplicados, en ningún momento mencionó a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino que únicamente señaló el Código de Comercio, el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y la Ley de Amparo.

Lo anterior demuestra que no le asiste razón al afirmar que sí se aplicó en su perjuicio la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que fue correcta la consideración del

Tribunal Colegiado al desestimar la inconstitucionalidad de la misma por su falta de aplicación.

En consecuencia, al ser inoperantes e infundados los agravios hechos valer, lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** , en contra de los actos y por las autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz (Ponente) y Presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el señor Ministro Humberto Román Palacios.

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA.

MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO
DE GARCÍA VILLEGAS.

MINISTRO PONENTE.

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.

MANUEL DE JESÚS SANTIZO RINCÓN.

“En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.